



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: TERESA CORREA DE GIRALDO
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 019 2018 00621 01
Sentencia: S-063

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de CONSULTA concedido a favor de la parte demandante, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 2 de marzo de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

TERESA CORREA DE GIRALDO demandó a la ACP COLPENSIONES, para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo JULIO CÉSAR CORREA

GIRALDO, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que su hijo JULIO CÉSAR GIRALDO CORREA falleció el 15 de octubre de 1988; que su primera solicitud de pensión de sobrevivientes fue resuelta por medio de la Resolución SUB 20773 del 24 de enero de 2018, en la que se le negó la prestación por cuanto el afiliado tenía apenas 46 semanas cotizadas; que volvió a solicitar la prestación el 12 de marzo de 2018 con el argumento de que el fallecido había prestado servicio militar entre el 1 de julio de 1986 y el 31 de octubre de 1987, los cuales debían sumarse a las 46 semanas ya acreditadas; que la entidad negó nuevamente la solicitud según Resolución SUB 112349 del 26 de abril de 2018, por no haberse acreditado 150 semanas de cotización en los 6 años anteriores a la fecha del fallecimiento o 300 en cualquier época; que la entidad no ha tenido en cuenta los tiempos certificados por el MINISTERIO DE DEFENSA; y que su hijo era soltero, no tenía hijos y era quien se encargaba de su sostenimiento económico.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de fallecimiento del causante, su afiliación a la entidad, el total de cotizaciones efectuadas y lo relacionado con la decisión de negar su solicitud pensional, aclarando que los reglamentos del ISS solo permiten tener en consideración las semanas cotizadas directamente a esa entidad, sin que resulte admisible incluir los tiempos de servicio en virtud de la prestación del servicio militar. Se opone a las pretensiones proponiendo como excepciones inexistencia del derecho a reconocer pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios, improcedencia de la indexación, buena fe, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 2 de marzo de 2020, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante, a quien condenó en costas, fijando agencias en derecho por \$200.000.

Conoce la Sala del asunto por CONSULTA a favor de la demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión solicitando se confirme la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que el causante no dejó acreditada la densidad de cotización que se exigen en los términos del decreto 3041 de 1966, sin que resulte posible tener en cuenta los tiempos de servicio al MINISTERIO DE DEFENSA, ya que por tratarse de tiempos públicos, su posibilidad apenas vino a ser contemplada con la expedición de la ley 71 de 1988.

CONSIDERACIONES:

Es claro que la señora TERESA CORREA DE GIRALDO aspira con la presente acción judicial se acceda al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo JULIO CÉSAR GIRALDO CORREA, hecho ocurrido el 15 de octubre de 1988, por considerar que reúne los requisitos de semanas de cotización establecidos en el artículo 12 de la ley 797 de 2003.

Ante todo, es conveniente dejar en claro que las siguientes circunstancias no han sido objeto de discusión dentro del proceso: i) que el señor JULIO CÉSAR GIRALDO CORREA falleció el 15 de octubre de 1988 (fl. 24); ii) que la entidad demandada negó por primera vez la prestación reclamada mediante Resolución SUB 20773 del 24 de

enero de 2018 por no acreditar el número mínimo de semanas exigidas en el decreto 3041 de 1966, (fls. 13 a 16); y *iii*) que una segunda solicitud presentada en marzo 12 de 2018, también fue resuelta de forma negativa tal y como consta en el contenido de la Resolución SUB 112349 del 26 de abril de 2018, (fls. 18 a 21).

Se advierte que en esta última Resolución se hace mención a que el causante dejó acreditadas un total de 46 semanas de cotización sin que fuera posible tener en cuenta los tiempos de servicio en el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, toda vez que el decreto 3041 de 1966 admite únicamente las cotizaciones realizadas directamente al entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Lo primero que se debe advertir, que de hecho es lo principal por la forma en que fue planteada la demanda, es que cuando de pensiones de sobrevivencia se trata, la fecha de fallecimiento del causante es la que en términos generales marca la pauta para efectos de identificar la norma a tener en cuenta para el estudio de los requisitos que se exigen para su procedencia.

En este sentido, para definir el asunto en cuestión, es claro que debe aplicarse el régimen legal vigente al momento en que se produjo el deceso, pues, así lo ha definido pacífica y reiterativamente la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal y como puede consultarse en las siguientes sentencias: la del 2 de marzo de 2007, radicado 27.593; del 29 de noviembre de 2011, radicado 40.055; del 21 de marzo de 2012, radicado 43.572; del 30 de enero de 2013, radicado 41024; la SL 13644 del 23 de agosto de 2017, rad. 53.043; la SL 1985 del 23 de mayo de 2018, rad. 65262; la SL 4960 del 7 de noviembre de 2018, rad. 65836; la SL 4559 del 23 de octubre de 2019, rad. 74456; y más recientemente la sentencia SL 414 del 27 de enero de 2021, rad. 69788. En ésta última se indicó expresamente lo siguiente:

“Este desatino lo condujo a ignorar que la Corte ha establecido de manera pacífica y uniforme que la fecha de la muerte del afiliado o pensionado es la que determina la normatividad a aplicar respecto a la sustitución pensional y el derecho a la pensión de sobrevivientes, lo anterior en virtud de la aplicación inmediata de la ley y del efecto retrospectivo de la misma (CSJ1067-2014, CSJ SL1592-2020 y CSJ SL1938-2020). Ello, porque la pensión de sobrevivientes tal como fue consagrada en el sistema general de pensiones es un derecho autónomo que nace o se estructura con la muerte del afiliado o pensionado y, por tanto, es la preceptiva que rige en ese momento la que gobierna el derecho que así se consolida”.

Conforme a lo anterior, en tratándose de pensiones de sobrevivientes, debe descartarse la aplicación de una norma diferente, especialmente de una norma posterior a la vigente al momento de la ocurrencia del hecho, como lo sería, por ejemplo, la ley 100 de 1993, con la modificación introducida a través de la ley 797 de 2003 tal y como se reclama en la demanda, así sus exigencias resulten más favorables a la situación de la demandante, pero sin que resulte aplicable por tratarse de una preceptiva que comenzó a regir cerca de 15 años después del fallecimiento del Sr. GIRALDO CORREA.

En este orden, atendiendo al fallecimiento del causante el 15 de octubre de 2015, significa que la norma aplicable en su caso es el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese año, art. 5º, modificado por el art. 19 del Acuerdo 019 de 1983, aprobado éste por el Decreto 232 de 1984, normas regulatorias en el sector privado que regían la materia para ese entonces.

Allí se exigía para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes: *“Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., dentro de los 6 años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época”*; que fue precisamente el argumento que tuvo en cuenta la entidad para negar lo pretendido.

Argumento que dicho sea de paso será el mismo que utilizará esta Sala de Decisión para confirmar la sentencia de primera instancia, en tanto el estudio de las cotizaciones realizadas por el causante, arroja como resultado que efectivamente no se cumplen las exigencias legales mínimas establecidas para reconocer la pensión de sobrevivientes reclamada.

Según la historia laboral allegada al expediente por la propia entidad demandada, fls. 60 a 65, el señor JULIO CÉSAR reporta haber cotizado en toda su vida laboral un total de 52.14 semanas, todas ellas con el empleador SERVIMOS Y EMPLEADOS LTDA, correspondientes al periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 1987 y el 23 de noviembre de 1988 cuando se produjo el retiro.

Ahora, como la muerte del causante ocurrió fue el 15 de octubre de 1988, significa que hubo un tiempo durante el cual el empleador siguió haciendo los aportes sin reportar en debida forma el retiro por muerte de su trabajador, de modo que esas cotizaciones realizadas desde octubre 16 a noviembre 23 de ese año 1988, no tienen ninguna validez y deben restarse. Son entonces 5.57 semanas que se deben descontar, lo que implica que son apenas 46.57 semanas las que en realidad quedaron acreditadas, número que coincide con la decisión del ISS en las resoluciones mediante las cuales se negó la pensión.

Y ese número de 46.57 semanas sin duda resulta insuficiente para acreditar el mínimo de 150 en los últimos 6 años, y lejos de llegar a los 300 que en toda la vida laboral se requieren, tal y como lo exige aquel decreto 232 de 1984.

Ahora, se encuentra acreditado en debida forma que el causante JULIO CÉSAR estuvo vinculado al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL entre el 1 de julio de 1986 y el 31 de octubre de 1987, tal y como se evidencia con los documentos visibles en los folios 27 a 32, en donde consta que aquel estuvo empleado como SOLDADO en la

ARMADA NACIONAL. En esa certificación, también se observa que durante ese tiempo no se le descontó ningún concepto para Seguridad Social.

En este punto, la Juez de Primera Instancia consideró que en aplicación de los reglamentos propios del ISS, como lo son los Acuerdos 224 de 1966 y 019 de 1983, aprobados por los decretos 3041 de 1966 y 232 de 1984 respectivamente, no era posible tener en cuenta semanas que no hubieran sido cotizadas directamente a la entidad, como lo son justamente aquellos tiempos de servicio al EJERCITO NACIONAL.

Pero independiente de lo que se pueda llegar a concluir al respecto, y aun en el caso hipotético de considerar viable la inclusión de esos tiempos de servicio, de todas maneras, el total de cotizaciones no sería suficiente para acreditar las exigencias de las normas citadas.

Por haber laborado al servicio del EJÉRCITO NACIONAL, eventualmente se podrían llegar a adicionar el equivalente a 68.71 semanas de cotización por la vinculación a esa entidad desde el 1 de julio de 1986 al 31 de octubre de 1987. Y sumadas esas semanas a las 46.57 efectivamente cotizadas al ISS, arroja como resultado un total de 115.28 semanas, que claramente resultan inferiores a las 150 exigidas en los años 6 anteriores a la muerte.

Siendo así, para la Sala no queda otro camino que confirmar la sentencia de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el día 2 de marzo de 2020.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 056 del 7 de abril de 2021

Consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Código de verificación: **05d259c8a75a942719048a110373c430621cd9cb7e3ad5b5719d89468051b242**

Documento generado en 06/04/2021 02:18:51 PM